



*Comisión de Legislación y  
Puntos Constitucionales*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C.A.*

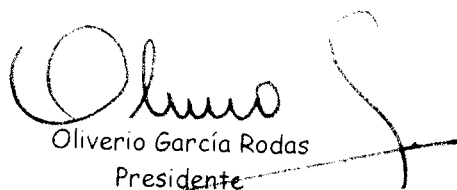
12 de noviembre del 2008

Licenciada  
Ana Isabel Antillón  
Dirección Legislativa  
Congreso de la República  
Su Despacho

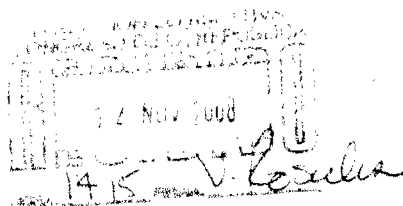
Señora Directora:

De manera atenta me dirijo a usted y de conformidad con lo regulado en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto el **DICTAMEN FAVORABLE**, emitido en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, a los once días del mes de noviembre del año en curso, a la **Iniciativa No.3849** que dispone aprobar **REFORMAS AL DECRETO NUMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, CODIGO PENAL**.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar a la Señora Directora las muestras de mi alta estima.

  
Oliverio García Rodas  
Presidente

cc. arch.



*Comisión de Legislación y  
Puntos Constitucionales  
Congreso de la República  
Guatemala, C.A.*

**DICTAMEN No. 018 - 2008**

**INICIATIVA 3849**

**REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA,  
CÓDIGO PENAL.**

**HONORABLE PLENO**

**ANTECEDENTES**

Con fecha uno de agosto de dos mil ocho, el Honorable Pleno del Congreso de la República remitió para su estudio y dictamen a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales la iniciativa 3849, presentada por los Diputados Jorge Mario Barrios Falla, Noé Alberto Orellana Callejas, Manuel de Jesús Barquín Duran, Juan Francisco Cárdenas Argueta, Byron Juventino Chacón Ardón, Juan Armando Chun Chanchavac, Edgar Dedet Guzmán, Reynabel Estrada Roca, Mirma Magnolia Figueroa Resen, Edgar Efraín García Estrada, Carlos Gerardo Gordillo Marroquín, Gabriel Heredia Castro, José Alfredo Hernández de la Cruz, Virna Ileana López Chacón, Jaime Antonio Martínez Lohayza, Jorge Méndez Herbruger, Galim Adami Morales Barrios, Oswin René Morales Flores, Enrique Pinto Martínez, Juan Ramón Ponce Guay, William Rubén Recinos Sandoval, Ewald Mauricio Sheel Aguilar y Rodolfo Alejandro Salazar de León; que dispone aprobar reformas al decreto número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal.

**CONTENIDO DE LA INICIATIVA**

La iniciativa en su exposición de motivos destaca que conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, es obligación del Estado velar por la probidad y el eficiente desempeño de los cargos públicos para evitar actos de corrupción. Por ello

*Comisión de Legislación y  
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República  
Guatemala, C.A.*

es necesario que los jefes y encargados del orden público, funcionarios o empleados públicos, dignatarios y servidores de entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas deben tener una mayor responsabilidad en la tarea que se les ha encomendado y que ello quede garantizado no solamente desde el punto de vista moral, sino que legalmente exista una obligación mayor por el ejercicio de sus funciones.

Destaca que debido a la autoridad que les es delegada a personas que desempeñan cargos públicos o que administran fondos públicos, en Guatemala históricamente, han existido abusos en el desempeño de sus labores, por lo que es necesario que las actuaciones sean veladas por el poder estatal, estableciendo no solo agravantes a los hechos delictivos cometidos en el ejercicio de su función pública, sino estableciendo además otras medidas que desestimen la comisión de hechos ilícitos por parte de dignatarios, funcionarios o empleados públicos.

Justifican los ponentes la importancia de establecer un agravante especial a los delitos cometidos por los jefes y encargados del orden público, funcionarios y empleados públicos, dignatarios y servidores de entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas, en el ejercicio de su cargo; de tal forma que respondan, por sus acciones cometidas en contra de las personas y sus bienes, así como contra de Estado y sus respectivos bienes, estableciendo aumento de las penas a imponer.

Así mismo consideran necesario reformar el decreto número 1773 del Congreso de la República, Código Penal en sus artículos 28 (Agravante Especial), 51 (Inconmutabilidad), 72 (Suspensión Condicional de la Pena).

**CONSIDERACIONES DE ORDEN  
CONSTITUCIONAL Y LEGAL**

Considera la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que ha efecto de dar transparencia a todos los actos de la administración se hace necesario emitir legislación más severa en cuanto a la responsabilidad y las sanciones de aquellos ilícitos en los que funcionarios o empleados públicos incurran en la administración pública.

*Comisión de Legislación y  
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República  
Guatemala, C. A.*

Por esa razón la propuesta que se hace en la iniciativa sobre la creación de una agravante especial es procedente, sin embargo la Comisión considera que no debe derogarse la disposición actual contemplada en el artículo veintiocho, sino constituir la propuesta en un segundo párrafo del mismo artículo, la propuesta hecha por los diputados ponentes, ya que la redacción actual del artículo 28 del Código Penal resguarda los derechos fundamentales de los ciudadanos y evita de alguna manera el abuso de poder de parte de los encargados del orden público en el cumplimiento de sus atribuciones y la propuesta se refiere a la situación de funcionarios, empleados o personas que reciban fondos del Estado o hagan colectas públicas.

Además de ello la Comisión considera que para guardar la proporcionalidad de las penas y sus agravantes contenidas en el Código Penal, debe modificarse la propuesta estableciendo la agravante con una aplicación del doble de la pena que corresponda al hecho cometido.

En cuanto a la propuesta de reformar el artículo cincuenta y uno del Código Penal, la Comisión considera que es conveniente la reforma mencionada dejando la redacción como está propuesta.

En cuanto la propuesta contenida en el artículo tercero de la iniciativa, sobre consideración de un caso más de exclusión de suspensión de la pena la Comisión considera que no es procedente la adición propuesta, puesto que las condiciones para suspender una pena el Juez debe de considerarlos de acuerdo al análisis de todo el proceso penal y las circunstancias del condenado, las que pueden variar de manera considerable y de cualquier manera es una facultad que corresponde exclusivamente a quienes administran justicia en el país.

**DICTAMEN**

En base a las consideraciones Legales y Políticas vertidas anteriormente, esta Comisión emite **DICTAMEN FAVORABLE CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS** a la iniciativa 3849 que dispone aprobar reformas al Decreto número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal; por ser Constitucional, oportuna y conveniente.

*Comisión de Legislación y  
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República  
Guatemala, C.A.*

Dado en la sala de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en la ciudad de Guatemala el día once de noviembre de dos mil ocho.

  
**Oliverio García Rodas**  
Presidente

**Roberto Ricardo Villate Villatoro**  
Vicepresidente

  
**José Alberto Gándara Torrebiarte**  
Secretario

  
**Rosa María Ángel Madrid de Frade**

  
**Héctor Alfredo Nuila Ericastilla**

  
**Francisco José Contreras Contreras**

  
**Rodolfo Anibal García Hernández**

  
**Cesar Augusto Del Águila López**

**José Roberto Alejos Cámara**

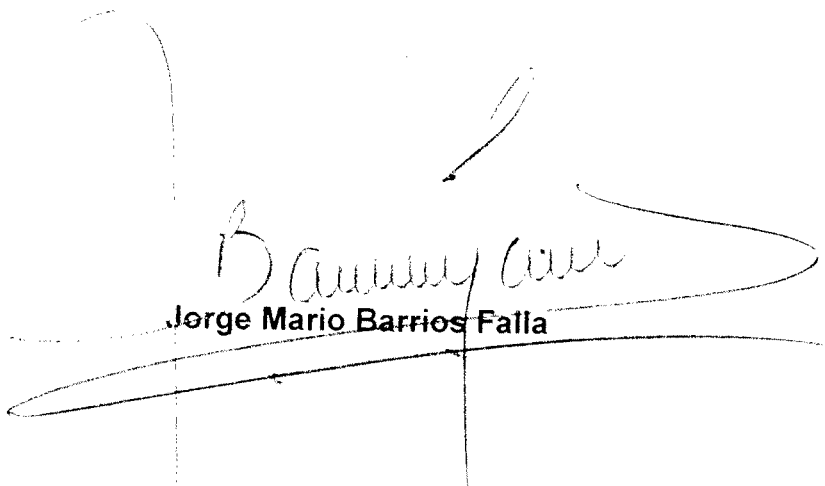
  
**Carlos Valentín Gramajo Maldonado**



*Comisión de Legislación y  
Puntos Constitucionales  
Congreso de la República  
Guatemala, C. A.*

**Maura Estrada Mansilla**

**Gladis Anabella De León Ruiz**

  
**Jorge Mario Barrios Falla**

**Carlos Enrique Bautista Godínez**

  
**Ronnie Danilo Escobar**

**DECRETO NÚMERO -2008**

**EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA**

**CONSIDERANDO:**

Que es obligación del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia y la seguridad, fortaleciendo la responsabilidad de los jefes y encargados del orden público, funcionarios o empleados públicos, dignatarios y servidores de entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas, así como cualquier persona individual o jurídica que administre fondos del Estado o haga colectas públicas. Debido a la autoridad que se les delega, ha existido históricamente un abuso de poder por parte de las personas que ocupa dichos cargos, por tal sentido se hace necesario legislar las consecuencias a que deberán estar sujetos por el errado desempeño de sus funciones.

**CONSIDERANDO:**

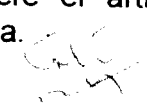
Que es indispensable que el Congreso de la República, en cumplimiento de sus funciones emita disposiciones legales que sirvan de instrumento para la obtención de los fines del Estado, estableciendo mecanismos de control y además de las normas ya existentes, otras que impidan o limiten acciones, que los hacen incurrir en actos delictivos; que causan daño a personas particulares y sus bienes, así como contra el Estado y sus bienes y prevenir el aprovechamiento personal o enriquecimiento ilícito.

**CONSIDERANDO:**

Que es necesario hacer reformas al Código Penal para la aplicación de penas enérgicas por el abuso en el ejercicio de su cargo o en la administración de fondos públicos, excluyéndoles del beneficio de la conmuta de las penas privativas de libertad y la suspensión condicional de la pena que la ley otorga, a quienes por el contrario debe imponérseles todo el peso de la ley triplicando el monto de su pena.

**POR TANTO:**

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala.



**DECRETA:**

Las siguientes:

**REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA,  
CÓDIGO PENAL.**

**ARTÍCULO 1.** Se reforma el artículo 28 (AGRAVANTES ESPECIALES) del Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas (Código Penal), adicionando un párrafo segundo al artículo, el cual queda así:

“Artículo 28. **Agravante especial de aplicación relativa.** Los jefes o encargados del orden público, que cometieren cualquier delito contra las personas o sus bienes siempre que se pruebe que en la realización del mismo, se produjo grave abuso de autoridad y de la confianza que el Estado les ha otorgado, se les impondrá la pena correspondiente al delito cometido aumentada en una cuarta parte.

Los funcionarios o empleados públicos, dignatarios y servidores de entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas, incluyendo los jefes y encargados del orden público, así como cualquier persona individual o jurídica que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas, y que en el ejercicio de su cargo, que cometieren cualquier delito contra las personas o sus bienes y el Estado o sus bienes, serán sancionados con el triple de la pena que corresponda al hecho cometido."

**ARTÍCULO 2.** Se adiciona el numeral 6º al artículo 51 (INCONMUTABLES) del Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas (Código Penal), el cual queda así:

“6° A los funcionarios o empleados públicos, dignatarios y servidores de entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas incluyendo los jefes y encargados del orden público así como cualquier persona que administre fondos del Estado o haga colectas públicas, que hayan cometido delito en el ejercicio de su cargo.”

**Artículo 3. Vigencia.** El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

**PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.**

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE  
GUATEMALA, EL                      DEL MES DE                      DEL AÑO DOS MIL OCHO.